



Revista de Fomento Social, 57 (2002), 133-150

Elecciones 2001 en Nicaragua: lecciones y escenarios post-electorales

Manuel ORTEGA HEGG¹

El 4 de noviembre de 2001 se realizaron en Nicaragua las elecciones generales para Presidente y Vice Presidente de la República, así como las elecciones para Diputados nacionales (20), Diputados departamentales y regionales a la Asamblea Nacional(70), y Diputados al Parlamento Centroamericano para un período de cinco años (20).

Este artículo pretende analizar estas elecciones generales, identificar algunas lecciones y prever los escenarios post-electorales posibles.

Estos comicios suceden un año después de la celebración de las primeras elecciones municipales, realizadas de forma separada de las elecciones generales el 5 de noviembre de 2000.

Los principales contendientes en esta elección fueron el Frente Sandinista

¹ Centro de Análisis Socio-Cultural, Universidad Centroamericana (UCA), Managua, Nicaragua.

de Liberación Nacional (FSLN), partido de origen izquierdista, el Partido Liberal Constitucional (PLC) partido de derecha, y el Partido Conservador (PC), un partido de la derecha oligárquica más tradicional.

1. El contexto de país: la situación actual de Nicaragua

Estas elecciones se producen en una Nicaragua que, según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en el año 2000 ocupaba el lugar 116 de un conjunto de 174 países. En ese año era el tercer país más empobrecido del continente americano, después de Guatemala y Haití. Sin embargo, en 1991 Nicaragua ocupaba el lugar 85², lo que muestra que el país ha venido ampliando cada vez más su distancia de los países centrales.

De acuerdo al método de medición de la pobreza conocido como de necesidades básicas insatisfechas (NBI), la pobreza afecta a 2,3 millones de nicaraguenses, lo que significa casi la mitad de la población. De ellas, 830.000 (17%) se encuentran en extrema pobreza. Otras mediciones indican que este dato está subestimado³, pues según el método de línea de pobreza ésta afecta a más del 82% de los nicaraguenses⁴.

Pero además, Nicaragua es hoy el país más endeudado del mundo en términos per cápita. En 1999 el saldo total de la deuda era igual a 2,9 veces el valor del Producto Interno Bruto, 7,7 veces el valor anual de las exportaciones de bienes y servicios y 9,5 veces el valor anual de los impuestos recaudados por el gobierno⁵. En ese mismo año, mientras el producto interno bruto nominal per cápita registraba el nivel de US\$ 460, cada nicaraguense adeudaba US\$ 1.317 a sus acreedores externos⁶. Esta deuda es a todas luces impagable por el país. De ahí que los organismos multilaterales hayan ido sometiendo al país a una serie de condiciones para que pudiera ser incluido en los beneficios derivados de la llamada Iniciativa de los Países Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés). Ello incluye la elaboración

² PNUD (2000), *El Desarrollo Humano en Nicaragua 2000. Equidad para superar la vulnerabilidad*, Managua.

³ Id.

⁴ GPC (2000), "¿Por qué no ingresó Nicaragua a la HIPC?", Managua, Año 2, n° 26.

⁵ NÉSTOR AVENDAÑO (2000), *Nicaragua y la Iniciativa para países pobres muy endeudados*, Managua, Mimeo.

⁶ Id.

participativa de una estrategia reforzada de lucha contra la pobreza, actualmente en proceso.

Una de las condiciones para el acceso a los beneficios de la iniciativa HIPC ha sido el cumplimiento del Programa Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF). Los efectos más sentidos del ajuste estructural han sido el desempleo creciente y la informalización del mercado laboral.

El perfil del mercado laboral en Nicaragua indica que casi el 80% de la ocupación es informal, lo que significa básicamente bajos ingresos, empleo precario y falta de seguridad social. El desempleo abierto no es el problema fundamental. Este se ubica en 10,7% de la PEA; sin embargo, el 41,3% de la PEA urbana tenía problemas de subocupación y el trabajo por cuenta propia ha saturado el sector informal⁷. El 62% de los que laboran en este mercado no logran ni siquiera obtener media canasta básica⁸.

Pero el programa de ajuste estructural también ha significado el casi congelamiento de los salarios y la reducción de su poder adquisitivo como efecto de los continuos ajustes de las tarifas por servicios públicos; el cierre de pequeñas y medianas empresas como efecto de la apertura comercial, con su consiguiente efecto en el empleo; el quiebre del modelo agroexportador, que se ve incapaz de competir en los mercados protegidos y controlados por los países centrales sin contar con medidas de protección, apoyo y fomento nacional.

Por otro lado, la economía ha venido creciendo muy lentamente, pero la distribución de la riqueza ha vuelto a concentrarse, dando un mentís a la teoría del derrame. Los datos sobre distribución del ingreso entre 1993 y 1998 muestran que la brecha entre ricos y pobres se ha ido agrandando y que no basta el crecimiento de la economía para mejorar la situación de los pobres: debido a la política de focalización el 10% de la población de menores ingresos elevó su participación en el ingreso nacional de 0,4% a 0,8%; sin embargo, en este mismo periodo se ha producido una mayor concentración del ingreso en el 10% de la población de mayores ingresos, que de un 42,4% en 1993 elevó su participación en el ingreso nacional en un 44,7% en 1998. El 1% más rico que en 1993 se había apropiado de un 13,2%, en 1998 se apropió de un 15,6%, lo que representaba un monto superior al percibido por el 50%

⁷ Id.

⁸ LUZ ELENA SEQUEIRA, *Empleados Públicos: Víctimas de los ajustes*. [Http://www.elobservador economico.com.ni/empleados.htm](http://www.elobservador economico.com.ni/empleados.htm)

de la población⁹. Visto en términos de género, las mujeres obtienen como ingresos individuales un 40% menos de los obtenidos por los hombres.

La saturación creciente del mercado informal ha obligado a otra estrategia de sobrevivencia: la emigración hacia el exterior. La migración nicaraguense reciente hacia el exterior ha sido estimada en 900.000 personas o lo que es lo mismo el 19% de la población total del país¹⁰. El modelo agroexportador tradicional no logró nunca emplear permanentemente a sus trabajadores, los que para reproducirse se trasladaban de cultivo en cultivo estacional en el transcurso del año. Esto se ha globalizado en las condiciones actuales. Con la quiebra de algunos de esos cultivos en el país (algodón antes y recientemente el café), este ciclo se tiene que rehacer externamente, trabajando en cultivos de agroexportación de países vecinos, provocando migraciones estacionales o permanentes. Así, el campesinado que ha logrado resistir ha sido a costa de su cada vez mayor empobrecimiento y de la emigración temporal. El gobierno ha prestado poca atención a este problema, considerándolo una válvula de escape por la remisión de remesas, que alivia el desempleo y facilita la sobrevivencia.

Una encuesta del gobierno en 1998 indicaba que uno de cada cuatro hogares del país reciben remesas de familiares que trabajan en el exterior¹¹. Un estudio del BID basado en cifras de 1999 indica que Nicaragua recibe 345 millones de dólares en remesas, lo que equivale al 14,4 % del PIB del país¹². Sin embargo, otros efectos no visibles, como la creciente erosión del capital humano que sale del país, o la separación familiar y la educación de los niños por abuelos, abuelas y aun vecinos tendrán repercusiones en la estructura social futura. Por otro lado, el modelo de globalización con libre circulación de capitales, pero fuertes restricciones a la libre circulación a la fuerza de trabajo, convierte a la mayor parte de estos migrantes en ilegales y materia de explotación y discriminación permanentes, sin ningún tipo de garantías ni derechos.

Pero también se ha agudizado en el país el sentido de desprotección social. Durante la década de los ochenta la población, particularmente la población

⁹ Id.

¹⁰ Id., p. 91.

¹¹ Id.

¹² Véase (2001), "Remesas Latinoamericanas suman US \$20.000 millones". En: *El Nuevo Diario*, n° 7.450, p. 6.

urbana, se sentía incluida en el sistema aun en condiciones de guerra y pobreza. Con el desmantelamiento de la revolución en 1990 y la celeridad con que se ha venido implementando el régimen neoliberal, la población se ha sentido desprotegida y excluida del acceso a lo más elemental, quedándose sin ningún tipo de red de protección social. Una evaluación de la pobreza en Nicaragua llevado a cabo por el propio Banco Mundial señala que “los pobres en Nicaragua asocian la década de los noventa con una declinación de su bienestar”¹³.

El mismo estudio de Banco Mundial muestra que ésta no es sólo una percepción de la población, sino que tiene bases reales. El gasto social del país se ha venido reduciendo desde la década de los ochenta hasta la actualidad. En efecto, una comparación del gasto social como proporción del PIB muestra que el gasto en servicios sociales en 1985 había subido al 13,1% frente al 5,2% de la época somocista. Al final del gobierno sandinista esa proporción era del 14,7% (1990); en 1999 esa proporción era del 14,1%, después de conocer su pico más bajo en 1998 (9,8%). El estudio preveía el crecimiento al 15,2% en el año 2000. El gasto en educación en 1990 fue de 7,1% del PIB frente al 6,1% en 1999 y 6,3% previsto para el año 2000. En 1993 ese gasto había bajado a 4,3%. El gasto en salud que fue de 6,6% en 1990 bajó hasta 3,7% en 1998, subió a 5,1% en 1999 y se estimaba en 5,7% en el año 2000¹⁴. Entre 1993 y 1998 el gasto público social con fondos del gobierno cayó incluso en términos absolutos tanto en educación como en salud. El apoyo de donantes con una política de focalización ha logrado levantar un poco el gasto en los dos últimos años. Sin embargo, es un hecho de que los pobres han perdido sus derechos sociales, aunque se mantengan en la Constitución Política establecida en la década sandinista y reformada en 1995. La vivienda, el

¹³ WORLD BANK (2001), Report N0.20488-NI. *Nicaragua Poverty Assesment. Challenges and Opportunities for Poverty Reduction*. Volumen I: Main Report. Washington, page iii. Este estudio en su parte cualitativa señala que la primera prioridad para los nicaragüenses entrevistados en 22 comunidades de tres regiones (Pacífico, Centro y Atlántico, en áreas urbanas y rurales) era “comer”. Las preocupaciones diarias de los entrevistados –continúa el estudio– se expresaban en interrogantes como: ¿Cuántas veces podremos comer hoy? Y ¿deberá alguien de la familia pasar hambre hoy para darle de comer a los niños? El estudio señala distintas estrategias de sobrevivencia de las familias para enfrentar la situación de extrema pobreza que va desde aguantar hambre, reducir la ingesta de alimentos, el recurso al apoyo comunitario, el trabajo de todos los miembros de la familia incluyendo los niños y la venta de animales de patio hasta la migración interna e internacional.

¹⁴ W.B. (2001).

trabajo, la salud, la educación han sido cada vez menos garantizados por el Estado, y se han convertido en bienes que se adquieren a través del mercado o en casos de extrema pobreza, de programas sociales focalizados.

Este es el contexto en el que se producen las recientes elecciones generales.

2. El significado de las elecciones nicaragüenses de 2001

El análisis de estas elecciones generales de 2001 indican que la polarización política observada ha venido asumiendo la forma de una polarización electoral relativamente normal en estos procesos, a diferencia de elecciones anteriores donde la polarización tenía raíces sociales y económicas que iban más allá del campo político-electoral. Esta es una tendencia positiva que coincide con un aumento creciente de la tolerancia política observada en la población en estudios recientes¹⁵.

En efecto, por vez primera en la historia cercana de los procesos electorales en Nicaragua en estas elecciones no se discutieron ni se jugaron objetivos extraelectorales, como sí ocurrió en las elecciones de 1990 y 1996.

Así, cabe recordar que, con el derrocamiento insurreccional de la dictadura somocista en 1979, se instauraba en Nicaragua un nuevo régimen revolucionario sandinista que pretendía reorientar el país hacia un régimen definido por los mismos revolucionarios como de “aspiración socialista”. La guerra contrarrevolucionaria organizada y dirigida por los Estados Unidos, que se inició tempranamente en el país y que se extendió por toda la década de los ochenta, desangró al país, lo empobreció, y tensionó extraordinariamente las posibilidades de transformación al tener que destinar los recursos a las labores de defensa. Las elecciones de 1990 se convirtieron así en una especie de referendun para determinar si se continuaba con la búsqueda de un modelo alternativo de sociedad con todas sus dificultades, el acoso imperial y la guerra consecuente, o si el país volvía a la paz, lo que significaba volver al redil de los países de regímenes típicamente capitalistas. El resultado final fue la derrota de la opción revolucionaria.

Las elecciones de 1996 también supusieron objetivos extraelectorales al incluir en ella el debate de la propiedad. El problema reciente de la propiedad

¹⁵ Cfr. MANUEL ORTEGA HEGG (2001), *Cultura política, gobierno local y descentralización en Nicaragua*, El Salvador, FLACSO-CASC-UCA.

en Nicaragua surge del trastocamiento provocado por las reformas agrarias y urbanas de la época revolucionaria sandinista que redistribuyeron la propiedad entre miles de nicaraguenses desposeídos. Intentos de ordenar este proceso y de reconocer derechos de expropiados se iniciaron con el nuevo gobierno surgido de las elecciones de 1990, lográndose una ley con un buen nivel de consenso. Sin embargo, para 1996 el sector más derechista representado por el candidato liberal Arnoldo Alemán pretendió desconocer esta ley y planteaba en su plataforma de campaña revisar nuevamente el problema. Una nueva ley de consenso con el nuevo gobierno surgido en 1996 ha permitido avanzar sustantivamente en la resolución de este asunto. Hoy el problema de la propiedad es más bien residual en Nicaragua.

En las elecciones del 4 de noviembre del 2001 ni se debatieron modelos de sociedad como en 1990 ni estuvo en discusión “el tuyo y el mío” como en las elecciones de 1996. Los programas electorales de las principales fuerzas políticas tenían planteamientos similares, con énfasis distintos: combatir el desempleo, combatir la corrupción, mejorar la situación en el campo, impulsar la iniciativa privada como eje del desarrollo, no apartarse de los programas del FMI y seguir los dictados de los organismos financieros internacionales. No había ningún planteamiento alternativo.

Tal vez por vez primera los nicaragüenses, no obstante los miedos de última hora, se asomaron a unas elecciones en donde la venta de los planteamientos programáticos de los partidos y los candidatos se asimilaron a las de cualquier otra elección en un país periférico. Ello no puede obviar que el peso del pasado con viejos resabios y alineamientos de la década de los ochenta parecieron resurgir en un segmento de electores, lo que sin duda tuvo una enorme importancia en el resultado final de esta contienda electoral. Sin embargo, al menos unos quinientos mil votantes nuevos de más de un total de dos millones de electores no hacían ninguna referencia al pasado ni se alineaban ideológicamente por ninguno de los contendientes. Ello representó un nuevo reto a los partidos políticos para captar su voto.

Esta situación cambió el sentido y la profundidad de la polarización política de estas elecciones, que fue más producto de los diseños de propaganda y publicidad de los partidos que de bases materiales objetivas que polarizaran de antemano el espectro electoral.

3. El contexto institucional electoral

Los comicios del 4 de noviembre de 2001 tuvieron como marco un nuevo sistema electoral derivado del pacto bi-partidista del FSLN y el PLC.

Este nuevo sistema electoral –institucionalizado con la reforma de la ley en enero de 2000–, estuvo diseñado para excluir competidores a las fuerzas políticas pactantes. Con esta finalidad se establecieron requisitos excesivos para el registro de partidos y de candidatos, y se exigieron altos resultados para mantener la personería jurídica. Requisitos tales como un 4% de firmas del padrón de electores para fines de registro del partido y 4% más adicional para registrar candidatos, colocaba a los partidos pequeños en dificultades poco superables.

Ello se agudiza si se toma en cuenta que posteriormente el Consejo Supremo Electoral determinó que las firmas señaladas no podrían repetirse con las de ninguno otro partido y que el proceso de revisión podía anular firmas –como de hecho ocurrió– por ilegibilidad, repetición con listas presentadas por otros partidos, cambio de trazos en dichas firmas, no coincidencia con la firma original de la cédula electoral, etc.

Por otro lado, el sistema de financiamiento fue cambiado a un acto ex post. El reembolso de gastos de campaña en que incurrieran los partidos fue condicionado a obtener como resultado un 4% de los votos de los electores, dejando así de lado a los partidos sin suficientes recursos financieros.

La aplicación política y poco profesional de estos mismos requisitos y la amplia discrecionalidad que la ley le otorga al organismo electoral trajo como resultado la eliminación de todos los competidores a los partidos del pacto –salvo un partido, el Partido Conservador–, que intentaron registrarse y/o presentar candidatos para las elecciones municipales de noviembre de 2000 y para las elecciones generales del 4 de noviembre de 2001. La oferta electoral se redujo en Nicaragua de 25 opciones en las elecciones de 1996 a sólo tres en las recientes elecciones generales de 2001.

Pero el pacto también hizo cambios sustantivos en la integración del organismo electoral. Este acuerdo político bi-partidarizó al Consejo Supremo Electoral –órgano máximo de dirección y administración del proceso electoral en el país– estableciendo la composición de sus miembros con militantes de los partidos pactantes, en detrimento de la profesionalidad del mismo. Esta bi-partidización arranca de las juntas receptoras de votos hasta la cúpula del sistema. El antecedente negativo de este sistema se mostró en

las elecciones municipales de noviembre de 2000, cuando por desacuerdos políticos de los partidos no se logró obtener resultados oficiales sino hasta un mes después de las elecciones, luego de negociaciones de las cúpulas partidarias.

En estas elecciones generales esta composición poco profesional se observó en la discusión de la asignación de escaños de diputados. Esta se hizo más con criterios político-partidarios que con criterios técnico-profesionales, lo que provocó una crisis institucional importante en el país.

Esta nueva integración del organismo electoral desnaturaliza esta institución, haciéndola menos creíble y más costosa. Las encuestas pre-electorales señalaban que casi la mitad de los electores desconfiaban del organismo electoral; por otro lado, datos preliminares del proceso electoral –ahora con menos partidos en la contienda– indican que el costo de las elecciones generales de 2001 en Nicaragua subieron en más del doble comparadas con las elecciones generales de 1996.

4. Los resultados electorales en el entorno de Nicaragua

Los resultados de las elecciones generales para Presidente de la República y Diputados del 4 de noviembre de 2001 indican una rotunda victoria del candidato del partido de Gobierno a la Presidencia de la República (PLC) y una Asamblea Nacional constituida por una mayoría de diputados leales al entonces Presidente, Arnoldo Alemán. Datos del Consejo Supremo Electoral (CSE) señalan que las elecciones presidenciales arrojan un 56,28% de votos a favor del candidato del PLC y un 42,34% a favor del FSLN. El significado de estas cifras en la democracia electoral reciente de Nicaragua se sintetiza en el siguiente cuadro.

Como puede observarse en el cuadro, el FSLN había venido perdiendo votos desde las elecciones de 1984, cuando obtuvo el 67% de los sufragios. La pérdida de votos más dramática la sufrió en 1996, cuando obtuvo el 38%. En las elecciones de 2001 repunta al 42%. Sin embargo este repunte resultó insuficiente para ganar las elecciones en un espectro electoral bipartidista. El partido ganador obtuvo el 56% de los votos, para una victoria contundente con la que le saca 14 puntos de ventaja al segundo lugar.

**Resultados elecciones presidenciales por partidos
y alianzas de partidos en Nicaragua según votos válidos
(elecciones de 1984, 1990, 1996 y 2001)**

| ELECCIONES | PARTIDO 1 | PARTIDO 2 | PARTIDO 3 | OTROS |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1984 | FSLN 735.967 66,97% | PCDN 154.327 14,03% | PLI 105.560 9,60% | 103.079 9,40% |
| 1990 | UNO 777.552 54,74% | FSLN 579.886 40,82% | MUR 16.751 1,18% | 46.380 3,26% |
| 1996 | AL 896.207 50,99% | FSLN 664.909 37,83% | CCN 71.908 4,09% | 124.589 7,09% |
| 2001 | PLC 1.216.863 56,28% | FSLN 915.417 42,34% | PC 29.933 1,38% | |

UNO: Unión Nacional Opositora; PCDN: Partido Conservador Demócrata de Nicaragua; PLI: Partido Liberal Independiente; MUR: Movimiento de Unidad Revolucionaria; CCN: Camino Cristiano Nicaraguense; PLC: Partido Liberal Constitucionalista; PC: Partido Conservador.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Consejo Supremo Electoral.

Así, como resultado del pacto político PLC-FSLN que redujo opciones electorales, los votos se concentraron en dos opciones. El FSLN obtuvo efectivamente su mayor votación histórica desde 1984, sobrepasando el 40% de los votos que era el mínimo con el cual se podría ganar en primera vuelta; sin embargo, el mal cálculo no estuvo en ese repunte, sino en el grado de vulnerabilidad de su candidato ante los electores. Ella le facilitó al partido opositor obtener la mayor votación que un partido o alianza de partidos opositora al FSLN hubiera obtenido antes en la historia del país (56%).

Dada la fortaleza y amplitud de su voto orgánico, el FSLN tiende a comenzar las campañas electorales con un piso alto (por encima del 24%); pero su techo final suele ser más bien bajo, comparado con sus adversarios. Por el contrario, las opciones antisandinistas o no sandinistas suelen comenzar con un piso bajo (por debajo del 18%), pero en todos los casos han mostrado tener

la posibilidad de un techo bastante más alto que el FSLN, resultando finalmente vencedoras. El resto de votos en su inmensa mayoría no son orgánicos de ningún otro partido político. Una parte de este voto suele redistribuirse entre otras opciones participantes. En este caso, como efecto del pacto bipartidista, los votos tendieron a concentrarse en ambas opciones, elevando el techo de esos dos partidos; pero nuevamente se mantuvo la tendencia a que éste fuera más alto en el caso del candidato del PLC. En las elecciones para diputados, el PLC obtuvo un total de 53 diputados; el FSLN, 38, y el PC apenas 1 diputado. No obstante, ninguno de los partidos tiene la mayoría cualificada que requieren las grandes decisiones del país, incluyendo una reforma constitucional.

Estos resultados aparecieron como sorprendidos para la mayor parte de los analistas políticos y encuestadores que auguraban un final cerrado, con un ganador con un margen muy estrecho de votos. Pesaban en estas consideraciones fundamentalmente dos hechos políticos: en primer lugar, los resultados electorales de las elecciones municipales realizadas un año antes (noviembre de 2000), cuando la diferencia en votos a favor del PLC fue de apenas un 1%; entonces el FLSN había ganado 11 de las 17 plazas electorales más importantes del país, incluyendo Managua, la capital; en segundo lugar, las intenciones manifiestas de quienes declaraban en las encuestas que iban a votar. Hasta casi el último momento la intención de voto de las encuestas favoreció en su mayoría al candidato del FSLN y en algunas pocas encuestas finales al candidato del PLC.

Sin embargo, los que tuvieron la palabra final fueron los que decidieron no abstenerse y los que mantuvieron oculta su intención de voto hasta el día de las elecciones. El porcentaje de ambos andaba entre el 12% y el 18% según las diferentes encuestas. Casi unánimemente esos dos segmentos votaron en contra de la candidatura de Daniel Ortega.

5. Algunas lecciones

5.1. La vulnerabilidad del candidato sandinista

Los resultados electorales nicaraguenses permiten sacar algunas lecciones importantes para los partidos de origen izquierdista. La primera es que debe democratizarse el proceso de elección de candidatos a lo interno de estos partidos. La vulnerabilidad del candidato del FSLN aparece como una

lección no aprendida por este partido en el contexto histórico de la democracia electoral nicaraguense, dada la persistencia del propio Ortega para mantenerse como candidato.

Tres derrotas sucesivas de Daniel Ortega como candidato del FSLN han permitido observar que su liderazgo consigue el voto unánime a lo interno de las filas sandinistas, pero que no logra transitar exitosamente al voto no sandinista, siendo el primero insuficiente para ganar las elecciones. Daniel Ortega tiene la virtud de facilitar la polarización por su controversial papel durante los años que estuvo al frente del gobierno revolucionario sandinista en la década de los ochenta. En esa polarización resulta perdedor, al aglutinar todo el voto no sandinista y antisandinista en su contra. Según las encuestas más de un 42% del electorado ha venido manifestando expresamente la intención de no votar por Daniel Ortega, bajo ninguna circunstancia.

Así, una parte del voto por el candidato liberal en estas elecciones fue el constituido por el llamado “voto del miedo” producido por un posible regreso de Daniel Ortega al poder. Ese sentimiento tiene que ver con el temor del electorado de verse nuevamente confrontado a situaciones parecidas a las de la década de los ochenta. Ellas incluyeron enfrentamiento con los Estados Unidos, desestabilización y guerra, escasez y racionamiento, atentados a la propiedad y la libre empresa, servicio militar y alto desempleo.

Pero además Daniel Ortega suele ser un blanco seguro de tres grandes electores ya tradicionales en el país: la embajada norteamericana en Managua; la posición anti sandinista del líder de la iglesia católica de Nicaragua, Cardenal Miguel Obando y Bravo, y la empresa privada. Los medios de difusión, salvo excepciones, estuvieron menos polarizados que en elecciones anteriores.

La embajada norteamericana en Managua –bajo orientaciones del Departamento de Estado norteamericano– se encargó en distintos momentos de la campaña de dejar muy en claro que Daniel Ortega no era amigo de los Estados Unidos; pero también que, por el contrario, el FSLN había sido amigo de terroristas internacionales enemigos de los Estados Unidos. Más aún, este partido en su período de gobierno había sido enemigo de la democracia, la libre empresa y la economía de mercado. Hasta ahora no había ninguna señal clara de que eso hubiera cambiado. El mensaje subyacente era que en caso de llegar nuevamente al poder, Estados Unidos se reservaba el derecho de revisar sus relaciones de cooperación con Nicaragua, un país totalmente dependiente de la cooperación internacional.

La iglesia católica se encargó de convertir en pecado mortal la abstención electoral, dado que la misma favorecía al voto disciplinado sandinista. En una carta pastoral fechada un mes antes de las elecciones orientó a sus fieles sobre el tema y señaló muy claramente no solamente que se debía votar sino por quién votar (Ing. Enrique Bolaños, católico) y por quién no votar (Daniel Ortega, ateo). Ello fue reafirmado en una homilía del prelado católico en una misa el día anterior a las elecciones, transmitida por cadena de radio y televisión.

La iniciativa privada organizada tomó claro partido por el candidato del PLC, un ex presidente del gremio en la década sandinista. En el período electoral mantuvo en suspenso y al mínimo la actividad económica y las nuevas inversiones, hasta no conocer los resultados electorales. Una parte de los depósitos bancarios se fugaron del país y otros quedaron en puerta, listos para fugarse en caso de una victoria de Daniel Ortega.

Finalmente, Daniel Ortega se presentó a estas elecciones con un expediente negativo en términos personales y familiares: pendía sobre él la acusación de abuso y violación interpuesta por su hijastra Zoila América Narvaez. Daniel Ortega había enfrentado esta acusación evadiendo el fondo y alegando estar investido de inmunidad por su carácter de diputado.

Es difícil predecir el comportamiento del electorado con un candidato del FSLN distinto a Daniel Ortega; pero dos intentos fallidos anteriores alertaban muy claramente sobre una lección que no debía dejarse de lado para esta tercera ocasión.

5.2. La convergencia

El FSLN quiso superar la vulnerabilidad de sus candidato a través de una alianza. Buscó sumar votos a través de la creación de una convergencia de organizaciones políticas, pequeños partidos y personajes notables, como Antonio Lacayo, yerno y hombre fuerte del gobierno de Violeta de Chamorro. Incluyó a Agustín Jarquín, ex contralor de la República y miembro de la Unidad Social Cristiana, en la fórmula presidencial como candidato a Vice Presidente. Es probable que parte del crecimiento de votos que experimentó el FSLN en esta elección se explique por esta alianza. Sin embargo, a diferencia del PLC, el FSLN no ofertó escaños como diputados a sus aliados; sólo cargos en un posible futuro gobierno. Esto hizo la alianza poco atractiva a los aliados y al mismo electorado. El resultado fue un incremento de votos, pero siempre insuficiente para ganar la presidencia.

5.3. Credibilidad y marketing político

Sin embargo, estos factores no son suficientes para explicar la derrota del FSLN en estas elecciones. Otros factores internos tienen una cuota importante en este resultado. Estos factores pueden sintetizarse diciendo que el candidato del FSLN fue menos creíble que el candidato del PLC. La estrategia de marketing político para posicionar su imagen favorablemente en el electorado no logró convertirlo en un candidato creíble ni contrarrestar la campaña sucia de sus adversarios.

Frente a un Daniel Ortega presentado como campeón de la paz y el amor, la campaña sucia del PLC aprovechó la vulnerabilidad del candidato sandinista de diversas maneras. Pasó imágenes en la TV recordando los distintos “disfraces” de Daniel Ortega: en traje de faena militar en la década de los ochenta, de blanco inmaculado en la campaña electoral de 1996 y de flores sicodélicas en la de 2002; dejaban el efecto deseado por los adversarios de dudar de sus intenciones pacifistas y conciliadoras en la actualidad. La carta pastoral de los obispos católicos por su lado mandaba a sus adeptos a analizar la trayectoria de los candidatos ante de emitir sus votos y ver si su pasado avalaba sus posiciones actuales.

Ello se combinó con imágenes de Daniel Ortega con Muhamar Kadafi, Fidel Castro, Manuel Marulanda “Tiro Fijo”, y otros líderes, algunos de ellos en la lista norteamericana de terroristas internacionales. Pero también hubo referencias frecuentes a la acusación de violación interpuesta en su contra por su hijastra Zoila América Narvaez, respondida a la fecha sólo por la esposa de Ortega. Pero tampoco el diseño de la campaña logró credibilidad y confianza en el electorado. Grandes rótulos de carreteras con flores sicodélicas y mensajes de que “puede más el amor que el odio” o “Daniel, el camino del amor”, y su lema central: “La tierra prometida”, no terminaron de convencer al electorado. Peor aún cuando el FSLN abandonó los colores de su bandera rojo y negro por amarillos, anarajandos y otros colores, abjurando de la simbología sandinista tradicional.

5.4. El abandono del rol de opositor

El pacto del FSLN con el PLC significó también compartir responsabilidades en las principales instituciones del Estado donde se le dio representación al FSLN. Aunado a ello, el FSLN exhibió una falta total de beligerancia para denunciar la corrupción galopante del gobierno por sus intereses negocia-

dos en el pacto. En la percepción ciudadana el FSLN no se diferenciaba de sus adversarios por sus principios y comportamientos éticos. Más aún, en algunos casos se le percibió más como cómplice de los abusos de poder y falta de transparencia que como partido opositor a los mismos. Tampoco se le vio luchando por hacer avanzar posiciones alternativas a la agenda gubernamental. De esta manera, aparece ante el electorado como un partido de corte tradicional, más preocupado por los beneficios de sus élites políticas a cualquier precio que por concertar desde la oposición un programa de transformaciones en beneficio ciudadano.

Ello tiene que ver con una tensión no resuelta por el FSLN: lograr establecer una estrategia que tome en cuenta la lucha electoral periódica con un programa de transformaciones permanentes de más largo plazo. Parece así haber perdido su rumbo estratégico y haberse sumido en la lucha electorera inmediatista.

6. ¿Un gobierno sin partido?

La coyuntura actual podría colocar nuevamente en la historia del país a un Ejecutivo sin partido frente a una doble oposición fuerte (PLC y FSLN) en el poder legislativo. El Presidente Enrique Bolaños tiene sus orígenes políticos en el partido conservador y sólo el año de las elecciones se afilió formalmente al Partido de gobierno (PLC) que lo llevó al poder. El antecedente de una experiencia similar se encuentra en el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990–1996), candidata independiente y sin militancia partidaria que llegó al poder con el vehículo de los partidos de la llamada Unión Nacional Opositora (UNO), y que terminó gobernando con el apoyo del FSLN, partido de oposición.

Las diferencias sin embargo son evidentes. Señalaremos al menos dos. La primera diferencia está en la fortaleza del liderazgo alternativo al Poder Ejecutivo en el vehículo partidario que lo llevó al poder. El liderazgo del partido Liberal Constitucionalista (PLC) en manos del ex Presidente de la República saliente, Arnoldo Alemán, es fuerte. No se compara con un liderazgo similar alternativo al Poder Ejecutivo en la desaparecida UNO en 1996. Más aún, el actual resultado electoral le ha fortalecido aún más, dado que finalmente lo constituye en el líder político victorioso de la apuesta que significó el pacto entre el PLC y el FSLN.

Una segunda diferencia tiene que ver con la debilidad institucional actual del Estado comparada con el periodo de gobierno de Violeta Barrios de

Chamorro. Esa debilidad convierte al líder del PLC en un líder muy fuerte también en el Estado, dada la gran ascendencia que el pacto mismo le ha dado sobre los miembros de los otros poderes, luego que estos poderes han sido bi-partidarizados por los acuerdos ya citados entre ambos líderes.

Recordemos que el pacto establece una bi-partidización del poder judicial, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República, con ventaja del partido de gobierno en la composición de estos poderes y organismos. La Asamblea Nacional quedaba ya bi-partidarizada por el nuevo diseño de asignación de escaños –que fortalece a los partidos mayoritarios y el bipartidismo– a diferencia de la ley electoral anterior al pacto que favorecía a los partidos minoritarios.

La crisis de institucionalidad manifestada en estos últimos años en las diferentes instituciones afectadas por el pacto coloca la profesionalización de las instituciones del sistema político como una tarea urgente e ineludible para el nuevo período de gobierno.

7. Los escenarios post-electorales

A manera de conclusión presentamos posibles escenarios post-electorales.

Primer escenario: el bloque dominante constituido por el nuevo grupo en el poder, el partido liberal, la iglesia católica, la empresa privada y la política del Departamento de Estado Norteamericano se mantiene unido e impulsa sólo un programa de gobierno liberal. Ello supone una armonía entre el Ejecutivo y la bancada liberal en la Asamblea Nacional, y un fuerte apoyo de la actual administración norteamericana y la Iglesia católica. En este escenario podrían preverse algunos problemas, como la exclusión de la oposición, la no inclusión de demandas de sectores no liberales ni sandinistas en el programa de gobierno. Ello podría tender a situaciones de tensiones y conflictos con los excluidos, en una situación que requiere el máximo de unidad nacional para afrontar la grave situación nacional heredada.

Frente a este escenario se yergue el riesgo de conflictos por hegemonías a lo interno del grupo dominante, expresado en el control real del aparato partidario y de gobierno, que tiene como trasfondo las ambiciones expresadas por el Presidente de la República saliente y actual Presidente de la Asamblea Nacional de buscar la reelección en el año 2006; pero también en algunas medidas relacionadas con la preeminencia de la institucionalidad por encima de los liderazgos unipersonales caudillistas y autoritarios, así

como la promesa del gobierno entrante de investigar todos los casos de corrupción de las gestiones de los gobiernos anteriores, incluyendo el gobierno liberal del Dr. Arnoldo Alemán.

Segundo escenario: el Ejecutivo se alía con el FSLN. En este escenario, se prevé un posible desenlace de ruptura en el bloque victorioso, producto de la no resolución favorable de las contradicciones anteriores. Esa ruptura supone la creación de una bancada parlamentaria favorable al Ejecutivo, que aliada a la bancada sandinista, le permita gobernar con una agenda más amplia que el programa liberal. Este podría ser el escenario más probable dadas las contradicciones entre el Ejecutivo y el ex presidente Alemán, ahora presidente de la Asamblea Nacional y claramente enfilado hacia su postulación presidencial en las elecciones de 2006. Esas contradicciones tienden a agudizarse dada la decisión del nuevo gobierno de aclarar todas las numerosas y graves denuncias de corrupción del gobierno anterior. Sin embargo, el gobierno actual no parece demostrar la suficiente capacidad política para construir esta alianza, lo que podría malograrla. En este escenario, la apertura del nuevo gobierno a la sociedad civil seguirá siendo casi inevitable.

Un tercer escenario podría surgir de la actualización y profundización del pacto político del FSLN y Arnoldo Alemán. Temas como la revisión de la ley de inmunidad, la revisión de algunos casos referidos a la propiedad que afectarían al FSLN, la institucionalidad como amenaza a los poderes unipersonales de los líderes del PLC y el FSLN y la lucha contra la corrupción por parte del nuevo gobierno podrían alentar esta alianza. Este escenario podría ser de gran incertidumbre para el país. Podría esperarse desde reformas constitucionales y electorales hasta la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Este escenario sería igualmente desfavorable a la opinión pública y sectores organizados de la sociedad civil y los gobiernos locales, dejando poco espacio para su incidencia.

Un cuarto escenario, menos probable, es la conformación de un amplio proceso de concertación nacional que incluya a todas las fuerzas del país. En este caso, propuestas como la del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) de una visión de nación compartida y de propuestas de actores como el FSLN, en el mismo sentido, podría facilitar un gobierno con un amplio consenso y muy abierto y sensible a todos los sectores del país. En este escenario, las condiciones para el avance de un proceso descentralizador podrían ser más sustantivas que en cualquiera de los casos anteriores. El hecho de que en la contienda electoral los programas de los candidatos prácticamente coincidieran, no habiendo más diferencias que de

matices, como lo ha señalado el mismo Daniel Ortega, hace más viable este escenario. El avance de posibles procesos de re-institucionalización concertada del país establecería un marco ideal para el avance de la gobernabilidad democrática y procesos como la descentralización del Estado. Ese mismo marco sería un marco ideal para los procesos de democratización y modernización de los partidos políticos. Este escenario abriría también espacios importantes de incidencia a la sociedad civil, gobiernos locales y otros actores favorables a la descentralización.

Finalmente, la situación de deterioro económico social estructural del país generará una fuerte presión social para el cumplimiento de promesas electorales con una visión de muy corto plazo. Un mejoramiento en la situación económica –promesa fundamental de este nuevo gobierno– tiene como supuesto la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento institucional y la vigencia del estado de derecho para la resolución de conflictos sociales, así como amplios mecanismos y espacios de inclusión de actores. Dadas estas premisas, en un país que desde el pacto político PLC–FSLN ha visto debilitadas sus instituciones, y afectada la certidumbre jurídica, las posibilidades para la atracción de nuevas inversiones están dadas por la reversión del pacto. Ello pasa, sin embargo, por un acuerdo nacional. Ninguno de los dos partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional puede hacer reformas constitucionales o electorales sin contar con el otro.

Este reto se vuelve aún más urgente si se recuerda que el nuevo gobierno deberá enfrentarse a un entorno internacional más desfavorable, particularmente desde los sucesos del 11 de septiembre de 2001. La recesión económica afectará las exportaciones del país, y la guerra actual introducirá un competidor más por los recursos cada vez más escasos de la cooperación internacional. La rigidización de los factores político-ideológicos derivados de este enfrentamiento que ya tuvo sus efectos en el período electoral en contra del FSLN, continuará manteniendo repercusiones en el campo político del país en este período post-electoral¹⁶.

Sin embargo, la situación de un gobierno sin partido propio podría facilitar la apertura de éste a alianzas amplias con la sociedad civil, los municipios, la cooperación internacional y otros actores. El reto está planteado.

¹⁶ El PLC usó ampliamente en su campaña electoral el eje de un FSLN aliado al terrorismo internacional y, por tanto, sujeto a posibles represalias por el gobierno norteamericano, dada su amistad con líderes y movimientos sospechosos o claramente identificados por Estados Unidos como terroristas.